



Edward Rojas y Eduardo
Feuerhake
*Exterior del Museo de Arte
Moderno*
Chiloe/Castro, Chile

El sistema de partidos de México tras las elecciones del 2 de julio de 2000*

PEDRO PÉREZ HERRERO

Director del Centro de Estudios de México en la Unión Europea.

Profesor de la Universidad Complutense de Madrid

Buena parte de la información de este artículo es fruto de la reflexión realizada en el seminario permanente que sobre la realidad de México realiza el Centro de Estudios de México en la Unión Europea (CESMUE) y en especial de los dos Ciclos de Conferencias “Estado y Derecho en Iberoamérica: el caso de México” (1920/VI/2000) y “Las transformaciones políticas de fin de siglo: México visto por sus protagonistas y por los analistas de la Unión Europea” (Madrid 20-25/X/2000), organizados por el CESMUE.

El mapa político tras las elecciones del 2 de julio de 2000

El 2 de julio de 2000 Vicente Fox ganó la presidencia de la República en unos comicios realizados con suma limpieza y transparencia en el que participó un porcentaje alto de la población (63,97%; 58.782.737 votantes) en un clima de total tranquilidad. La ciudadanía decidió mayoritariamente apostar por el cambio en la presidencia de la República, convencida de que ello no traería aparejado ni el “choque de trenes” ni el caos que algunos analistas auguraban.

Vicente Fox [encabezando la Alianza por el Cambio, compuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM)] alcanzó el 42,52% de la votación (15.988.740 votos); Francisco Labastida (en representación del PRI) obtuvo el 36,10% (13.576.385 votos); Cuauhtémoc Cárdenas [cabeza de lista de la Alianza por México, compuesta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el Partido del Trabajo (PT), el Partido Alianza Social (PAS), el Partido Sociedad Nacionalista (PSN) y Convergencia por la Democracia (CD)] cosechó el 16,64% (6.259.048 de votos); Rincón Gallardo [cabeza de

lista del Partido Democracia Social (PDS)] el 1,57% (592.075 votos); Manuel Camacho Solís [en representación del Partido de Centro Democrático PCD)] el 0,55% (208.261 votos); Porfirio Muñoz Ledo [dirigente del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM)] el 0,42% (157.119 votos); y otros candidatos no registrados el 0,09% (32.457 votos). Los votos nulos representaron el 2,10% (789.838 votos).

En lo que respecta a la elección de diputados federales, el escrutinio ubica a la Alianza para el Cambio con el 44.6%, al PRI con el 42.2% y a la Alianza por México con el 13.2% de la votación total. En consecuencia, la Cámara de Diputados ha quedado compuesta tal y como se observa en el *Cuadro N° 1*.

En el caso de la elección de senadores, el reparto electoral coloca a la Alianza para el Cambio con el 39,85%, al PRI con el 46,87% y a la Alianza por México con el 13,28% respectivamente. En consecuencia, el Senado ha quedado conformado como se muestra en el *Cuadro N° 2*.

Los datos muestran un incontestable avance electoral del PAN en comparación con las elecciones

CUADRO 1

Integración de la LVIII legislatura de la Cámara de Diputados (2000 - 2003)

Partido Político	Mayoría Relativa	Representación Proporcional	Total	%
PAN	136	71	207	41.4
PRI	132	79	211	42.2
PRD	25	26	51	10.2
PVEM	6	10	16	3.2
PT	1	6	7	1.4
CD PPN	-	3	3	0.6
PSN	-	3	3	0.6
PAS	-	2	2	0.4
TOTAL	300	200	500	100.0

federales de 1994 y de 1997 (ha obtenido mayoría en todas las circunscripciones menos en la tercera correspondiente a los estados del sureste como Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán). Los mismos datos electorales reflejan que los votantes mexicanos han sido capaces de conseguir que no haya habido ni grandes perdedores, ni grandes vencedores. Vicente Fox ha ganado la presidencia de la República, pero el PAN no tiene mayoría absoluta en las Cámaras de Diputados y Senadores, por lo que los antiguos poderes metaconstitucionales del presidente han quedado recortados. El PRI ha obtenido casi la

mitad de los escaños en el Congreso y el Senado, por lo que se convierte en el partido de oposición más importante por el número de votos, además de haber demostrado que sigue controlando la región del sureste de la República. El PRD ha ganado la jefatura del gobierno del Distrito Federal [Manuel López Obrador (PRD) obtuvo el 39,50% de la votación; Santiago Creel (PAN) el 33,98%; Jesús Silva Herzog (PRI) el 22,30%; y Teresa Vale (PDS) el 3,35%], pero perdió cinco distritos urbanos (de un total de 16) y no logró alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea de Representantes del DF (PAN: 21; PRD: 19). El resto de los partidos han hecho

CUADRO 2

Integración de la LVIII legislatura de la Cámara de Senadores (2000 - 2003)

Partido Político	Mayoría Relativa	Primera Minoría	Representación Proporcional	Total	%
PAN	27	10	9	46	35.94
PRI	32	15	13	60	46.87
PRD	4	7	4	15	11.72
PVEM	1	-	4	5	3.91
PT	-	-	1	1	0.78
CD PPN	-	-	1	1	0.78
TOTAL	64	32	32	128	100.00

una labor digna defendiendo sus programas, aunque el resultado electoral les haya sido adverso.

En suma, si el PRD ha sido castigado con una importante pérdida de votos en las presidenciales y de diputados y senadores, el nuevo escenario político parlamentario resultante de dichos comicios le convierte en un partido bisagra clave. No hay ninguna duda de que durante los próximos años (al menos hasta las elecciones intermedias de 2003 en que se renovará el 50% de las Cámaras de Diputados y Senadores) el diálogo, los consensos y las discusiones serán la tónica general. Los palacios de San Lázaro (Cámara de Diputados) y de Xicoténcatl (Cámara de Senadores) han consolidado el protagonismo político que comenzaron a recuperar a partir de las elecciones intermedias de 1997. La política se ha dignificado. El Instituto Federal Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y los ciudadanos sin lugar a dudas han sido los grandes protagonistas y México el gran ganador.

El período postelectoral (del 2 de julio al 1 de diciembre de 2000) se ha caracterizado a su vez también por el clima de tranquilidad. La administración del presidente saliente de Ernesto Zedillo y el equipo de transición del presidente electo Vicente Fox han trabajado de forma coordinada sin estridencias ni tensiones. La denominada "transición de terciopelo" entre una y otra administración ha sido hasta al menos el 1 de diciembre ejemplar. Evidentemente, en el momento en el que a partir del 2 de diciembre se sepan los nombres de las personas que ocuparán las correspondientes secretarías y subsecretarías, así como los distintos cargos de relevancia (momento en el que además muchos de los antiguos cuadros dirigentes del PRI tendrán que enfrentarse al vacío de poder) posiblemente se originará un malestar peligroso capaz de generar

olas desestabilizadoras en muchos frentes. En el PAN probablemente se generarán descontentos entre aquellos que se consideren desplazados por no haber recibido el puesto que creían merecer. En el PRI se pondrán en evidencia las heridas dolorosas hasta ahora calladas y que difícilmente se cicatrizarán en unas cuantas semanas o meses. Sin duda, muchos priístas reconocerán al presidente saliente Ernesto Zedillo haber sido capaz de crear las condiciones necesarias para garantizar la transparencia electoral, pero otros le etiquetarán de traidor por no haber defendido la bandera del PRI con la "fuerza" que consideran debiera haberlo hecho para que este partido saliera victorioso de las urnas. En el PRD los eternos disensos y los probables transfugismos pondrán en evidencia una vez más sus tradicionales tensiones internas. Todo ello hará que entre unos y otros se crucen invectivas y se traten de trasladar culpas.

Los grandes problemas pendientes de México

Los problemas a los que se enfrenta México a finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI son variados. La economía, según indican las macromagnitudes, su puede decir que va razonablemente bien, habiéndose roto, al parecer, el tan temido ritmo de crisis de final de sexenio. El precio del dinero sigue reduciéndose, la inflación parece estar controlada, el peso en su relación al dólar sigue mostrando una fortaleza -quizás incluso desmedida, lo cual se traduce en un castigo a las exportaciones con el consiguiente deterioro preocupante de la balanza comercial-, la llegada continua de inversiones extranjeras permite acortar el déficit en la balanza de pagos, el déficit público se mantiene en niveles aceptables, la deuda pública externa se ha logrado mantener en niveles moderados, la proporción de ahorro interno en el total ha crecido significativamente como resultado de la reforma

del sistema de pensiones y las medidas fiscales para promover el ahorro público, y la liberalización comercial y la negociación de acuerdos comerciales han potenciado una mayor diversificación de los mercados (aún sigue existiendo un fuerte dependencia con respecto al de EEUU) y ayudado a aumentar las exportaciones de manufacturas (reduciendo en consecuencia la proporción de las exportaciones petroleras).

Sin embargo, no hay que dejar de subrayar que tras los éxitos indudables se esconden también algunos problemas. La fuerte dependencia de la economía mexicana del mercado de EEUU hace que se mire al gran vecino del norte con interés para ver cómo va su salud económica. La tan temida desaceleración de la economía estadounidense y las oscilaciones del precio del crudo en los mercados internacionales son vistos con profunda preocupación y expectación desde el otro lado del río Bravo, ya que una caída de la demanda estadounidense y una reducción en la renta petrolera no sólo supondrían un freno a las exportaciones mexicanas y un recorte fiscal de envergadura, sino que pondría en evidencia de forma clara si el crecimiento de la economía mexicana realizado durante los últimos años es más coyuntural y dependiente del entorno internacional o si por el contrario es consecuencia de las transformaciones estructurales emprendidas. A su vez, hay que recordar que en México hay sectores de la economía que crecen rápido por ser competitivos y modernos, pero otros han quedado rezagados y su contracción es proporcionalmente inversa al éxito de las empresas que viven con éxito la globalización. Sigue siendo urgente consolidar el mercado interno; es necesario agilizar el sector financiero a fin de evitar los problemas de supervisión que han caracterizado a la banca; es perentorio simplificar el régimen fiscal y ofrecer reglas claras a

los inversores extranjeros; y es inexcusable compaginar las reglamentaciones de la Federación, los estados y los municipios a fin de transmitir reglas claras y uniformes a los inversores extranjeros. Lograda ya la transparencia electoral y alcanzada la alternancia política, hay que ponerse a trabajar en la consolidación y perfeccionamiento del Estado en los términos estrictos weberianos.

La extensión e intensidad de la pobreza es una de las asignaturas pendientes más importantes a las que se tiene que enfrentar la administración entrante. Todos los indicadores sociodemográficos coinciden en señalar que no se ha avanzado lo suficiente en mejorar la distribución del ingreso y lograr un mayor nivel de integración social. La pobreza no sólo no ha descendido, sino que ha aumentado tanto en términos totales, como relativos, además de haberse aumentado las diferencias regionales. Con casi 100 millones de habitantes, México ha logrado ya iniciar un proceso de desaceleración del crecimiento demográfico. Sin las políticas de contención de la natalidad iniciadas en la década de 1970, México habría llegado a los 138 millones de habitantes en el año 2000. Sin embargo, los retos siguen siendo descomunales. La población que requiere educación básica (de 6 a 14 años) ha pasado de 12,6 millones de habitantes en 1970 a 19,6 millones en 1998; la población laboral (de 15 a 64 años) ha aumentado de 24,3 millones de habitantes a 59,2 millones en 1998. Al mismo tiempo, las expectativas de vida se han alargado haciendo que la dependencia demográfica (población de la tercera edad dependiente de la población trabajadora) sea más elevada.

La emigración sigue mostrando más costos que beneficios para México. Los emigrantes ayudan a descomprimir la creciente demanda de puestos de tra-

bajo; facilitan la descompresión en las demandas políticas (muchos de los más inquietos optan por marcharse ante la falta de expectativas); y funcionan como un potentísima maquinaria de entrada de divisas (unos 6.000 millones de dólares anuales, cantidad cercana al valor de las exportaciones de petróleo). Sin embargo, no hay que olvidar que los emigrantes ofrecen su trabajo a los EEUU, por lo que recae sobre México el costo de la financiación de la formación de esa masa laboral y de su capacitación (por mínima que esta sea). No hay que dejar de recordar que el emigrante, en contra de lo que se suele plantear, no es el trabajador menos cualificado, sino aquel individuo con una mayor agresividad y pujanza que opta por el camino más costoso, sacrificando familia, tierra, costumbres y enfrentándose a problemas, peligros, una lengua distinta y un medio que desconoce. México pierde así una importante mano de obra (sólo una muy reducida cantidad de emigrantes tienen un nivel educativo elevado) que apuesta por el futuro con una reconocida capacidad de adaptación y una decidida voluntad de superación. A todas luces, México es el gran perdedor en la sangría que supone la fuga de su capital humano. Es impostergable resolver este tema y para ello es urgente encarar una actualización de la legislación laboral en México. El temor de los líderes sindicales y la avidez de los dirigentes patronales han mantenido en punto muerto los intentos de revisar la Ley Federal del Trabajo. No es cierto que en México sobren personas. Es más correcto plantear que *falta la economía adecuada que ofrezca las condiciones de trabajo para que nadie tenga que optar por emigrar.*

No obstante los problemas serios sociales existentes en México, de momento no se aprecian signos claros de que puedan generarse preocupantes turbulencias sociales a corto plazo. Quizás, la existen-

cia de un sistema clientelar corporativo mantenido por el PRI y los sindicatos tradicionales (Confederación Nacional Campesina, Confederación de Trabajadores Mexicanos), ha ayudado a frenar las disensiones y mantener el orden interno y la paz. Si esta interpretación es correcta, la pregunta obvia inquietante es qué pasará cuando dejen de funcionar (si es que lo hacen) estas redes clientelares que han logrado “secuestrar” estas inquietudes o aquietarlas a través de la distribución de recursos y favores cuando desaparezca el PRI del gobierno federal. A pocos analistas se le escapa plantear su preocupación cuando el próximo gobierno encabezado por Vicente Fox deje de contar con la colaboración y la confidencialidad de los antiguos sindicatos.

El narcotráfico sigue siendo otro tema crucial, no sólo por el castigo que pueda imponer EEUU con la concesión o no de la ominosa “certificación” (premio o castigo según considere unilateralmente el grado de colaboración prestado por México en la lucha contra el tráfico de estupefacientes), sino por el radio de influencia que ha alcanzado entre aquellos individuos con capacidad de toma de decisión en México (“narcotización de la política”).

La falta de seguridad ciudadana se ha convertido en un verdadero cáncer que retrasa la realización de los negocios, impide la convivencia pacífica e hipoteca el juego de fuerzas políticas. La reforma de la Justicia y el combate contra el fraude son otras de las asignaturas pendientes. Al existir tal distancia entre la norma escrita y la realidad, los gobernantes de México se han visto obligados a tolerar la ilegalidad como un comportamiento pragmático con el orden. La negociación del cumplimiento e incumplimiento de sus leyes se ha convertido así en un de los ejes centrales de la acción de los políticos, lo cual les ha ofrecido un excelente margen de manio-

bra para ejercer la discrecionalidad y gestionar de forma monopólica la concesión de los privilegios y las exclusiones. La tolerancia y la negociación se han convertido así en una de las formas de garantizar la impunidad. La violación continua del Estado de derecho ha propiciado una legitimad torcida, según palabras de Héctor Aguilar Camín. La lección de este análisis es sencillo: cuanto más se pretenda crear leyes “excelentes” y más irreales sean éstas, más espacio habrá para el ejercicio de la discrecionalidad y mayor margen de actuación se creará para los políticos como intermediarios entre el Estado y la sociedad. El reto no es por tanto empeñarse en crear leyes mejores o en meter en la cárcel a millones de mexicanos que transgreden la ley, sino en erradicar la discrecionalidad en el ejercicio del poder. La competencia política y la existencia de mecanismos de vigilancia a las acciones de los gestores de la política se muestran como los mejores instrumentos para lograr erradicar la ilegalidad y su correlato la corrupción. El respeto a la ley se tiene que realizar en un marco de transparencia democrática para reducir la discrecionalidad. No hay Estado sin orden, ni orden sin respeto a la justicia y aplicación de la ley. No es cuestión de aumentar exclusivamente el sistema represivo policial y de “purificar” y dignificar el sistema policial. Más policías honestos y bien pagados es condición necesaria, pero desde luego no suficiente. Una mejor coordinación de las policías de los niveles federal, estatal y municipal, así como un mejor reparto de la riqueza son condiciones también importantes para reducir los niveles de inseguridad.

Por lo que respecta al problema de Chiapas, hay que mencionar una vez más que es un tema sumamente complejo y que indudablemente no se puede resolver en quince minutos como prometió en la campaña electoral Vicente Fox. Hay que

erradicar la pobreza, la violencia, la discriminación, la injusticia, etc. en Chiapas, pero ello no es suficiente. Solucionar Chiapas es enfrentarse al tema de las identidades y ello supone desmontar el mito del mestizo. Los acuerdos de San Andrés llegarán a buen puerto sólo cuando un porcentaje amplio de la población mexicana acepte que es posible construir una identidad basada en la combinación y cruce de múltiples identidades nacionales. Los tzotziles no están reclamando la independencia, sino que se les deje vivir de acuerdo a sus costumbres sin que ello tenga que pasar necesariamente por tener que renunciar a ser mexicanos. Si no se ofrece una solución rápida y profunda a estas reclamaciones los fundamentalismos étnicos podrán cundir por doquier creando situaciones de riesgo importantes. Las minorías y el respeto a la diversidad deben ir suplantando el discurso unificador pretendidamente integrador nacionalista revolucionario. Es necesario realizar una reflexión profunda del ser de México y por tanto realizar una revisión del proceso histórico. Una sociedad pluricultural necesita de una lectura del pasado plural.

El sistema de partidos previsible tras las elecciones del 2 de julio de 2000
Para algunos analistas el 2 de julio de 2000 representa el comienzo de la transformación del sistema político mexicano. Para otros pocos supone el final exitoso de una larga lucha por la democracia. Para muchos representa una etapa más de un proceso de maduración. Los primeros plantean lo que queda por hacer. Los segundos sostienen que alcanzada la alternancia (derrotado el PRI) se ha llegado a la meta. Los terceros se preguntan cómo ir avanzando en el camino, para lo que plantean la necesidad de revisar el pasado evitando las interpretaciones tanto catastrofistas como idealizadas

a fin de poder construir un futuro en el que sin haber excluidos quepan unos y otros.

Si el sexenio de Carlos Salinas de Gortari fue el período de la modernización económica, el sexenio de Ernesto Zedillo ha pasado a la historia como la etapa que dio el último impulso capaz de facilitar la transformación de las prácticas políticas. Las elecciones de 1997 crearon un primer escenario político en la Cámara de Diputados en la que el PRI perdió la mayoría absoluta, pasándose en consecuencia a una nueva época en que el presidente de la República no tenía el poder omnímodo de antaño. Ernesto Zedillo “se cortó el dedo”, renunciando a la tradicional práctica de designación del presidente sucesor (“tapado”), garantizó la transparencia, aceptó democráticamente las sucesivas derrotas en distintos estados de la República, convivió con gobernadores de oposición, impulsó la democratización interna de su partido (primarias), vigiló el cumplimiento de la libertad de expresión y luchó por preservar el respeto a la ley.

Sin embargo, lo que ha quedado claro después del 2 de julio es que los discursos y los programas de los partidos políticos se han quedado obsoletos. Cuando se revisan con cuidado los programas electorales de los distintos partidos políticos que compitieron en las últimas elecciones se comprueba que si bien unos siguen anclados en el pasado tratando de impedir la transformación de la sociedad mexicana negándose a reconocer la profunda evolución que se ha dado en la misma en las últimas décadas, otros se piensan que están en presencia de una sociedad compuesta por ciudadanos concienciados políticamente que pueden decidir libremente más allá de las fidelidades, las lealtades y las complejas redes clientelares que durante tantos años se han urdido y todavía siguen existiendo. Seguir con

un discurso dirigido a campesinos y obreros cuando estos sectores ya no representan la mayoría de la población es anacrónico. Tratar de seguir legitimando una acción política como el resultado de una revolución efectuada para beneficio de los desposeídos cuando se reconoce oficialmente que casi un 50% de la población de México vive en la pobreza es un despropósito político suicida. Confiar en que unos ciudadanos concienciados van a optar de forma espontánea por desmontar los mecanismos informales y denunciar los abusos de poder existentes que han venido operando durante decenios es otro espejismo. La derrota del PRI no es sólo un revés electoral de un partido, sino que supone la desarticulación de una forma de hacer política y la necesidad en consecuencia de crear un nuevo sistema político en su conjunto, lo cual requiere de cambios más profundos de los que algunos pueden imaginar.

Hasta la fecha el discurso político se ha basado en un juego de contrarios: el PRI (encarnación de los valores de la revolución y la lucha por la justicia social) y el anti-PRI (PRI como símbolo de la corrupción, el abuso y la prepotencia). Ello ha tenido un coste político elevado, ya que ha hecho imposible la realización de pactos, negociaciones, diálogos con el poder (el PRI), por ser considerados como actos de traición. La democracia, se interpretaba, pasaba inevitablemente por la derrota del PRI. El problema que se ha planteado con la llegada de la alternancia es que se ha desarmado ideológicamente al mismo tiempo a algunos importantes partidos de oposición.

El PRI al no tener la figura cohesionadora de la presidencia ha quedado peligrosamente herido y con él posiblemente incluso el buen funcionamiento de la Federación (el PRI es el único partido

con presencia política en todos los estados de la República). Preocupa si ante la ausencia de la antigua figura del presidente fuerte cohesionador los gobernadores de los estados van a comenzar a reclamar ahora mayor autonomía. Eliminada la pieza central del priísmo (el presidente), el partido puede dividirse en multitud de pedazos, balcanizarse. En dicho caso estaríamos ante un escenario en el que los caudillos regionales se enfrentarían entre sí como lo hicieron hasta la firma del pacto de 1929 que dio vida precisamente al PNR-PRM-PRI. Lo que no cabe duda es de que el PRI sigue siendo una fuerza política importante con un peso indiscutible en el Congreso y en el Senado. Además de ser la primera o la segunda fuerza política en todos los estados de la República (gobierna en 19 de los 32 estados de la República, incluyendo el gobierno del DF).

Debe quedar claro en consecuencia, que cualquier reforma de calado en la Constitución que se quiera acometer debe pasar por el consenso con el PRI. La fuerza del PRI reside en consecuencia en mantenerse unido. De lo contrario, triunfarán las fuerzas disgregadoras. El pulso que está realizando Roberto Madrazo por llegar a la presidencia del PRI e interpretar que las elecciones de Tabasco fueron una especie de “primarias” que le legitiman para presentarse como el candidato natural para ocupar la presidencia del partido puede tener consecuencias negativas si esta lucha termina en escisiones y en un enfrentamiento entre personalidades, en vez de en una discusión profunda sobre las estrategias a seguir para remodelar el partido a las nuevas circunstancias, así como la forma de rejuvenecer su discurso, sus dirigentes y la base de su militancia. Si se rompe el sistema clientelar tan denostado de la noche a la mañana y no se sustituye por ningún mecanismo alternativo, millones de individuos se quedarán en el mayor de los desampa-

ros y los vacíos de poder serán aprovechados por quienes los han mantenido históricamente bajo control. Quizás este escenario podría tener un efecto búmerang positivo para el PRI, ya que muchos de estos desamparados acabarían reclamando el regreso del PRI y sus viejas prácticas en tanto que partido garante del orden y de la paz social; pero también podría suceder que se generara una situación como la de Rusia en la que los desplazados del poder político han hecho alianzas con la delincuencia organizada creando poderosas mafias que impiden el buen funcionamiento de las instituciones.

El gran reto que tiene el PRI es que su propia larga historia y su enorme capacidad de adaptación han hecho que dicho partido haya abanderado y defendido casi todas las posibles posturas ideológicas. Desde las claramente proteccionistas y de apuesta de un aumento del gasto social de las administraciones de Lázaro Cárdenas (1934-1940), Adolfo López Mateos (1958-1964), Luis Echeverría (1970-1976); hasta aquellas administraciones claramente proclives a políticas de apoyo empresarial de apertura económica y desregulación como las de Miguel Alemán (1946-1952), Gustavo Díaz Ordaz (1964-1970), Miguel de la Madrid (1982-1988), Carlos Salinas (1988-1994) y Ernesto Zedillo (1994-2000); pasando por la que de acuerdo a la denominación actual podríamos etiquetar de centro, como las presidencias de Manuel Avila Camacho (1940-1946), Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) y José López Portillo (1976-1982). El PRI debe definir y decidirse ahora con claridad por un discurso que le identifique con una postura política. Ya se acabó la concepción de que el PRI por el hecho de ser heredero de la revolución de 1910 era el representante de todos los mexicanos y por tanto era la encarnación de México, por lo que

quien atacara o criticara al PRI y sus colores se interpretaba como una ofensa a México y a la bandera. Al haber hecho coincidir el partido con el gobierno y el Estado, hay que proceder ahora (al haber perdido la presidencia) a realizar una reidentificación del partido.

Por su parte el PAN ya no puede seguir manteniendo el discurso de que representa la “oposición leal” ya que ha ganado la presidencia. Sólo algunos panistas plantean (Diego Fernández de Cevallos a la cabeza) que el discurso de su partido debe seguir siendo de “oposición leal” a la presidencia de la República. A su vez hay que aclarar que Vicente Fox no tiene un cheque en blanco para actuar libremente, ni puede convertirse aunque fuera su deseo en un otro presidente-imperial, ya que no cuenta ni con el apoyo incondicional de su partido ni goza de la mayoría absoluta ni en el Congreso ni en el Senado. Tampoco tiene mucho margen de maniobra para el año 2001, pues la ley de ingresos y egresos para el ejercicio del año próximo ya está prácticamente comprometida (97% del total de egresos). El apoyo de “Los amigos de Fox” funcionó bien como aliado para ganar la presidencia, pero ahora el presidente tiene que gobernar apoyándose en el Congreso y en el Senado y allí “los amigos” no pueden ejercer la misma fuerza que demostraron en la campaña electoral. También es verdad que presumiblemente Vicente Fox no se encontrará con un Congreso en contra por sistema como fue la costumbre de antaño. El diálogo posiblemente dejará de verse como una traición para pasar a ser lo que es, un mecanismo para lograr alianzas que permitan alcanzar fines políticos concretos. El discurso de la oposición ya no será de negación, de enfrentamiento.

No obstante, el propio Vicente Fox puede acabar siendo asfixiado por su éxito electoral, ya que mu-

chos mexicanos esperan ahora que el nuevo flamante presidente ofrezca soluciones mágicas inmediatas a los problemas estructurales de México a partir del primero de diciembre. Según las encuestas que se han venido publicado en los periódicos mexicanos durante los meses de septiembre y octubre, un 80% de los mexicanos (en números redondos) confía que Vicente Fox será capaz de arreglar los problemas de la educación; un 61% considera que podrá resolver el tema de la pobreza; un 68% cree que cerrará exitosamente el problema de Chiapas; y un 46% opina que está en condiciones de erradicar el lacerante problema del narcotráfico (incluso un 5% opina que Vicente Fox es capaz de arreglar el narcotráfico de forma inmediata). Obviamente, un exceso de confianza puede ahogar a Vicente Fox. No es casual que ya haya tenido que declarar públicamente que él no es un mago y que debido al escaso margen de maniobra que le queda para diseñar la ley de ingresos y egresos para el año 2001 que se debe aprobar en el Congreso y en el Senado antes del 31 de diciembre de 2000, no puede cumplir de forma inmediata con todos los compromisos y promesas de su campaña electoral. Incluso ya ha subrayado que lo más importante e inmediato que hay que afrontar es la realización de una reforma fiscal integral. El problema que se planteará el nuevo presidente a partir del primero de diciembre es como gestionar adecuadamente el descontento derivado de las lógicas frustraciones de millones de individuos que se sentirán traicionados por un presidente que no es capaz de cumplir de forma inmediata las promesas que divulgó por toda la República cuando era candidato a la presidencia.

Por su parte, el PRD ya no puede seguir reclamando la transparencia electoral y la alternancia (discurso que ha venido repitiendo de forma obsesiva

desde los comicios de 1988 por interpretar que México es esencialmente perredista y que el PRI sólo ganaba las elecciones como resultado del fraude electoral que efectuaba) como las grandes metas a conseguir, debido a que ya se ha dado la tan ansiada alternancia política como resultado de la transparencia. Irónica-mente, la llegada de la alternancia como resultado de la transparencia electoral han dejado al PRD desarmado. El discurso no puede seguir ya construyéndose sobre la base de la derrota del PRI. El PRD se ha quedado sin enemigo. Todo indica que el PRD debe convertirse en un partido político en vez de un movimiento liderado por Cuauhtémoc Cárdenas, pero ello significaría jubilar al “ingeniero”, lo cual supondría una liberación para algunos grupos, pero al mismo tiempo la pérdida de uno de los eslabones que han sido capaces de mantener aunque sea superficialmente unidos a distintas fuerzas, grupos, movimientos y agrupaciones. El PRD necesita institucionalizarse, cambiar su discurso e incluso sería apropiado que variara sus siglas, pues ya no puede seguir basando su lucha únicamente en alcanzar la democracia.

Ante este panorama, todo parece indicar que el sistema de partidos existente tendrá que sufrir importantes modificaciones durante los próximos años. El PRI ya ha convocado a su XVIII Asamblea Nacional para mayo del 2001 para discutir su agenda, tratar de cerrar filas para evitar las disensiones internas que supondrían la atomización del partido e incluso plantear un cambio en su emblema (ya que hasta ahora ha sido los colores de la bandera de México, lo cual ha suscitado sospechas de su validez constitucional por los partidos de oposición) y en sus siglas, lo cual no sería nada novedoso, ya que sería la cuarta vez que lo hace (PNR, PRM, PRI) (según otros autores sería la

quinta modificación pues interpretan que el PRD fue un intento fallido de reconfigurar el PRI). El PRD está haciendo lo propio para reconstruir sus filas. Amalia García ha reconocido públicamente que el partido que lidera debe someterse a una importante cirugía y ha manifestado abiertamente que considera necesario refundarlo para dar origen a otro de corte socialdemócrata moderno, reflexivo, autocrítico, sin la presencia de personalismos excluyentes y en el que los “grupos de presión” se conviertan en “grupos de opinión”. El diálogo abierto y claro debe ser la regla en vez de los autoritarismos o el clientelaje. A su vez, el PAN tendrá que clarificar su oferta política ante un electorado más maduro que ya no optará en las elecciones del 2006 por el voto de castigo contra el PRI.

En resumen, todos los partidos mayoritarios actuales tendrán que pasar en los próximos meses por una especie de “travesía del desierto” en virtud de la cual unos se fortalecerán, otros desaparecerán y otros se fusionarán. Parece evidente que en el 2006 los partidos que compitan a las elecciones presidenciales serán probablemente no sólo distintos por sus siglas, sino también por sus contenidos programáticos. El PRI y el PRD necesitan erradicar la estigmatización a la que han sido sometidos durante los últimos años. Reconocerse públicamente como priísta ha llegado casi a ser para muchos sinónimo de corrupto, prepotente, autoritario. Autodefinirse como perredista se ha convertido para otros en sinónimo de defensor de “lo mexicano” y por tanto enemigo de lo “extranjero”, lo que implica un cierre peligroso en un mundo que corre irremisiblemente hacia la internacionalización. La sociedad mexicana ha evolucionado y las condiciones internacionales han variado. Sin embargo, los partidos actuales se muestran anquilosados, desgastados, atrapados en viejos discursos

sos, con poca agilidad para responder adecuadamente a las urgentes demandas internas y a los compromisos ineludibles externos.

Todo parece indicar la necesidad de que nazca un partido socialdemócrata moderno con un discurso no importado ni enlatado sino adecuado a las exigencias de un porcentaje amplio de la sociedad mexicana que de respuesta a los problemas de la pobreza, las diferencias regionales, las reclamaciones pluriétnicas y multiculturales; que no centre sus propuestas exclusivamente en el “antigobier-nismo”; que se proponga como metas acabar con las exclusiones y la existencia de privilegios; que base su administración sobre la libertad, la honradez y la profesionalización en la gestión de lo público (administración de carrera independiente); que luche por el respeto al medio ambiente; que pueje por una educación y sanidad públicas de calidad; que exija una Justicia digna de tal nombre, la división de poderes, la dignificación del ser humano (evitar la precarización del empleo), una reforma fiscal que grave las rentas de forma progresiva en vez del consumo, etc. Dicho partido se conformaría con la suma de los “inconformes” del PRI, del PRD, del PT, del PDS, del PCD, del PARM, del PVEM, del PAS, del PSN, del CD. No sería tampoco raro que el PAN, como contrapartida, se consolidara como un partido de centro derecha. Desde luego, el PAN tiene el camino más fácil, ya que lleva años luchando por la honradez en la administración, el respeto a las instituciones y la despersonalización en la toma de decisiones. Es por ello que bastantes panistas ven con desconfianza el excesivo protagonismo del Vicente Fox. Quizás en vez de un bipartidismo (centro-derecha versus centro-izquierda) se podría consolidar un sistema de dos partidos fuertes con otro u otros

minoritarios que basen su fuerza en su capacidad de partidos-bisagra.

La población mexicana demanda soluciones concretas a sus problemas y los partidos políticos existentes no están ofreciendo el marco adecuado para que se de la solución a las mismas. Lo que queda claro es que los partidos políticos tienen que ponerse a trabajar de forma rápida. No tienen que escatimar esfuerzos ni enredarse en añoranzas, sino “hacer su transición” y demostrar que están a la altura de la nueva ciudadanía mexicana. De lo contrario, podrán abrirse posibilidades para la aparición en los próximos meses de figuras que traten de ofrecer soluciones mágicas populistas desfasadas o autoritarias. Si los partidos se enredan demasiado tiempo en este proceso de autoreconfiguración, quizás se no se haga sino favorecer la expansión de un clima político peligroso que puede acabar impulsando a que el propio Vicente Fox (elegido sin duda democráticamente) se vea obligado a tener que gobernar de forma autoritaria a fin de ofrecer las soluciones rápidas que demanda la sociedad mexicana. La transformación del sistema de partidos no es una cuestión técnica exclusivamente necesaria para lograr afianzar la “normalidad democrática”, sino que es la pieza clave para la institucionalización del Estado. Sin un Estado de Derecho difícilmente se podrán ofrecer las condiciones de credibilidad y seguridad necesarias para fortalecer el crecimiento económico en un clima de sana competencia que impida la existencia de privilegios; y sin un desarrollo económico autosostenido no será posible crear los puestos de trabajo en las condiciones de dignidad que demanda la sociedad mexicana a fin de alcanzar una mejor cohesión social y una mayor convergencia económica regional. •